LA CENSURA INQUISITORIAL EN LA ADUANA DE VITORIA

Paloma Miranda de Lage-Damon

Cuadernos de Sección. Derecho 9. (1995) p. 133-159
ISSN: 0213-0483
Donostia: Eusko Ikaskuntza

Al comenzar el siglo XVI, los Reyes Católicos, empeñados en la construcción de un Estado centralizado y homogéneo, establecieron un eficaz control sobre los libros que, en aquel momento, recién descubierta la imprenta, se habían convertido en certeros soportes capaces de transmitir eficazmente las ideas subversivas. La Inquisición jugó un importante papel en el control ideológico peninsular: En la ciudad de Vitoria, situada en los límites de confluencia entre las Provincias Exentas y la Castilla Extricta, aprovechando la aduana instalada varios siglos atrás, se situó uno de los más importantes centros de control y censura de publicaciones, que perduraría hasta el siglo XIX.

XVI. mendearen hasieran, Errege Katolikoek, Estatu zentralizatu eta homogeneoaren eraikuntzan zihardutelarik, kontrol eraginkorra ezarri zuten liburuen gainean, halakoak, inprenta aurkitu berria zela, ideia subbertsi-boak hedatzeko euskarri egokiak bilakatuak baitziren. Vitoriako hirian, «Provincias Exentas» zirenen eta «Castilla Extricta» haren mugan, mende batzuk lehenago ezarritako aduana aprobetxatuz, argitapenen kontrol eta zentsura gune garrantzitsuenariko bat kokatu zen, XIX. mendea arte bere hartan iraungo zuena.

A l'aube du XVI siècle, les Rois Catholiques, engagés dans la construction d'un Etat centralisé et homogène, établirent un efficace contrôle sur les livres que, en ce moment, avec la technique de l'imprimerie récemment découverte étaient devenus des objets dangereux, capables de transmettre très efficacement les idées subversives. L'Inquisition joua un rôle très important dans la politique de contrôle idéologique déployé sur la Péninsule. Dans la ville de Vitoria, située aux limites de confluence entre les «Provincias Exentas» et la «Castilla Extricte», et profitant du fait que longtemps auparavant une douane avait été établie, on situa l'un des plus importants centres de censure et contrôle des publications, qui demeurera, avec quelques périodes de baisse d'activité, jusqu'au XIX siècle.

REPERTORIO DE FUENTES

La documentación utilizada para la elaboración de este trabajo procede del Archivo Histórico Nacional de Madrid, que se cita como AHN, de las siguientes secciones:

- INQUISICION legajos, 1.680 a 1.682
2.240 a 2.245
3.729 a 3.732
4.429 a 4.431
4.500
libros, 480 y 481
484 a 488
- ESTADO legajos, 3.006
3.135 a 3.137
- CONSEJOS legajo 5.546

También se ha utilizado un legajo del Archivo Provincial de Alava, Fondo Samaniego, signatura 57, expedientes números, 11, 12, 13.

EVOLUCION DE LA CENSURA EN LA MONARQUIA ESPAÑOLA

La humanidad logró una de sus más portentosas hazañas intelectuales con la invención de la escritura. Las ideas encontraron en la palabra escrita un vehículo propagador, que facilitaba su difusión a través del tiempo y del espacio. Pero la escritura, tenía también la capacidad de servir de soporte a ideas, conceptos o doctrinas que cuestionaban el orden establecido, concitando a la subversión de los valores institucionalizados, ya fuera en la esfera de lo político, lo social o lo religioso, por lo que, rápidamente, los poderes fácticos hubieron de arbitrar los medios para atajar la expansión del peligro ideológico. Y así, nació la censura.

No pretendemos hacer aquí una historia de este freno a la libre circulación de las ideas en los antiguos reinos hispánicos, únicamente apuntaremos que, como dice Martínez Millán (1) incluso en Castilla, a pesar de la tolerancia cultural que caracterizaba a este reino durante la Edad Media y los albores de la Edad Moderna, al menos en dos ocasiones, se ejerció la censura sobre la palabra escrita. La primera vez, cuando fueron quemados parte de los libros de la biblioteca del marqués de Villena, enigmático personaje a mitad de camino entre el nigromante y el conspirador palaciego, por orden del rey Juan II. La segunda vez, dirigida ahora por el poder eclesiástico, al prohibirse las obras de Pedro de Osma, a causa de su teoría sobre la confesión, que fue considerada heterodoxa por las autoridades religiosas castellanas.

En Aragón, donde contrariamente a Castilla que se vió libre de Inquisición Medieval, este temido tribunal se estableció en 1232, por presión ante el papado de Raimundo de Peñafort, se censuraron tempranamente las obras de varios autores, entre los que destacan Arnaldo de Villanova y Raimundo Lulio por juzgarlas contrarias al dogma.

A principios del siglo XVI, los Reyes Católicos se preocuparon de establecer en sus Estados un control eficaz sobre los libros (2). La autoridad real se reservó el derecho de conceder las licencias para imprimir. El 8 de julio de 1502 fue dictada una Pragmática prohibiendo imprimir libros, ya fuera en latín o en lengua vulgar, sin haber conseguido antes un permiso Real al efecto.

La aparición de la Reforma y el combativo proselitismo que emanaba de los países del Norte protestante, sublevados contra la autoridad religiosa del papado, hizo que las jerarquías católicas, incapaces de evitar la publicación de obras heterodoxas en los Estados que se habían adherido a la Reforma, se dedicaran a perseguir todo libro sospechoso procedente de aquellas regiones. Con ese fin fue establecido un «Índice de los libros prohibidos».

(1) MARTINEZ MILLAN, J. «En torno al nacimiento de la Inquisición Medieval a través de la censura de libros en los reinos de Castilla y Aragón» *HISPANIA* 1980 N.º 144, p. 10.

(2) DEFURNEAUX, M. *L'Inquisition espagnole et les livres français au XV^e siècle*. Edition des Presses Universitaires de France. Paris 1963, p. 16.

Este primer Índice romano, al que seguirían muchos más durante los siglos venideros, fue publicado en 1559 por el papa Pablo VI (3). Pero en bastantes casos, los poderes políticos de algunos Estados, entre ellos España, se adelantaron al papado en su lucha contra las publicaciones sospechosas de heterodoxia protestante. La Inquisición jugó aquí un importante papel en la batalla contra las ideas de la Reforma. Este tribunal privilegiado tenía capacidad para actuar en todos los territorios que componían el Imperio español, sin excepción, pasando por encima de los particularismos locales y fueros de las diferentes regiones que a lo largo de siglos se habían ido aglutinando hasta formar un entramado unificado, pero no uniforme en cuanto a la legislación por la que se gobernaban sus súbditos.

Durante el reinado de Felipe II, el cometido de censurar los libros correspondía al Consejo de Castilla que tenía sus propios censores, y así continuó siempre hasta el siglo XVIII, en que se creó la figura del Juez de Imprenta, personaje encargado de dispensar los permisos para imprimir. La Inquisición, casi desde su período fundacional, ejercía una censura «a posteriori», sometiendo todo lo que se publicaba al exhaustivo examen de sus calificadores. Así velaba por la pureza doctrinal de los españoles, impidiendo que las miasmas heréticas, que podían haber pasado desapercibidas a los censores del Consejo, y más tarde al Juez de Imprenta, consiguiesen filtrarse hasta el público lector.

También correspondía a la Inquisición evitar que los libros perniciosos procedentes del extranjero, lograsen penetrar en la monarquía española y sus dominios de Ultramar. A tal efecto, en puertos, aduanas y demás lugares de introducción de mercaderías se irá creando una cada vez más perfeccionado «Cordón Sanitario» que alcanzará su apogeo en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando los peligros de la Revolución acaecida en Francia se vayan haciendo más patentes.

Durante los primeros años del siglo XVIII, la implantación de la dinastía borbónica en el trono español, había modificado en algunos aspectos el funcionamiento del engranaje inquisitorial. Por una parte, poco a poco la Compañía de Jesús se fue infiltrando en el Santo Oficio, especialmente en todo lo tocante a la censura de libros. Según Defourneaux (4) «el punto culminante del contubernio entre la Inquisición y la Compañía de Jesús está marcado por la aparición del Índice de 1747 en el cual, antijesuitismo queda asimilado pura y simplemente a herejía». Además, en el mismo período histórico, las tendencias regalistas de la Corona española irán incrementándose con la nueva dinastía, especialmente al llegar al trono Carlos III. Las condiciones en que se mueve la política religiosa de los borbones serán, en principio, poco propicias para la expansión de un tribunal de las características del Santo Oficio. De hecho, surgirán algunos proyectos para restringir su poder. Durante varios decenios la Inquisición llevará una vida lánguida, sacudida esporádicamente por algún proceso ruidoso. como el de Macanaz en 1715 o el de Olavide en 1778, pero en general soportará una existencia sin pena ni gloria mientras sucesivas Reales Ordenes contribuyen a minimizar su poder.

A partir de 1712, con el tratado de Utrecht, las relaciones entre Francia y España habían ido estrechándose gradualmente y esto contribuyó a favorecer los intercambios intelectuales entre los dos países (6), aunque la balanza se inclinaba poderosamente a favor de la cultura francesa que con su vigorosa pujanza tendía a la expansión transfronteriza. A medida que avanzaba el siglo, una verdadera avalancha de publicaciones en francés se derramó sobre

(3) *Ibidem*, p. 17.

(4) *Ibidem*, p. 27 y también en DOMERGUE, L. *Censure et lumieres dans l'Espagne de Charles III*. Editions du CNRS. París 1982, p. 81.

(5) DEFURNEAUX, M. *Op. cit.*, p. 27.

(6) *Ibidem*, pp. 27, 28.

la monarquía española, porque, citaremos de nuevo a Defourneaux (7) «Fue desde Francia —o al menos bajo envoltura francesa— como penetraron en España «las luces del siglo». El movimiento de la Ilustración no había surgido únicamente en Francia, como podría parecer por la intensidad que alcanzó en este país, pero utilizó a Francia como plataforma de lanzamiento, sin duda porque el idioma francés, desde el reinado de Luis XIV, se había convertido en una especie de nueva «lingua franca» de Occidente (8), el idioma que todo hombre culto debía dominar.

Sin embargo, a pesar del estrechamiento de relaciones entre España y Francia y pese a la firma de múltiples alianzas entre ambos estados, para los censores españoles toda obra impresa procedente del vecino país, o incluso, todo libro escrito en francés, tenía cierto tufillo subversivo. La Inquisición, dispuesta a velar por la heterodoxia de la religión y el mantenimiento de las buenas costumbres, no cesaba de alertar a las autoridades políticas sobre el peligro que tales publicaciones entrañaban.

La publicación, en París, en 1751, del primer tomo de la Gran Enciclopedia, inicia lo que puede llamarse el «Apogeo de la Ilustración». Muy pronto, en 1759 el Santo Oficio prohíbe la lectura de esta magna obra de la cultura humana, por considerarla incompatible con los principios de la religión (9). Guipúzcoa fue la provincia que, desde el primer momento, contó con mayor números de suscriptores a la Enciclopedia. Su situación fronteriza y la existencia en el seno de su sociedad de un activo núcleo de caballeros ilustrados que, decididamente, habían apostado con entusiasmo por «Las Luces» serán la causa de esta aparente paradoja: la provincia más pequeña de la monarquía española es capaz de albergar un número mayor de suscriptores a la famosa obra de Diderot y D'Alambert, que las grandes concentraciones urbanas como Madrid, Barcelona o Sevilla, o incluso, que ciudades de hondo raigambre universitario, como es el caso de Salamanca y Valladolid.

Pero el incidente que desató la furia de las autoridades españolas y les llevó a endurecer el «cordón sanitario» de una forma sin precedentes fue la publicación, en la Encyclopedie Methodique, del artículo de Masson de Morvilliers sobre España (10). En principio, la nueva enciclopedia de Panckoucke había sido pensada como una obra más inocua que su hermana mayor, la Gran Enciclopedia, que como ya hemos dicho fue rápidamente vetada por la Inquisición. Pretendía ganarse al público español e incluso, en un anuncio publicado el 16 de abril de 1782 en la Gaceta de Madrid, aseguraba a sus futuros suscriptores que entre sus proyectos figuraba el de convertirse en un instrumento útil a la Iglesia y al Estado (11).

El gran impresor madrileño Antonio Sancha, había mostrado su interés en ofrecer a los lectores españoles una traducción de la Enciclopedia Metódica, y el proyecto llegó hasta el Juez de Imprentas Nava, que lo remitió al censor Casimiro Ortega, obteniendo la licencia del Consejo el 3 de junio. Sancha, para apoyar su proyecto argumentaba que «por este medio se espera lograr no entren en adelante en España tanta multitud de libros en francés como se han introducido, causando gran perjuicio a nuestra sagrada religión y buenas costumbres y extrayendo del reino crecidas sumas de dinero en perjuicio de los intereses de la nación»

(7) *Ibidem*, p. 2.

(8) HERR, R. *España en la Revolución del siglo XVIII*. Editorial Aguilar. Madrid 1988, p. 6

(9) GROSCLAUDE, P. *Un andacieux message: l'Encyclopedie*. Editions latines. París 1951, pp. 43-44. El documento completo de la prohibición de la Enciclopedia puede encontrarse en *Índice último de los libros prohibidos y mandados expungar: para todos los reynos y señoríos del Católico Rey de las Españas, el Señor Carlos IV*. Imprenta Real. Madrid 1790, p. 88.

(10) DOMERGUE, L. Op. cit., p. 97.

(11) *Ibidem*.

(12). Pero el artículo de Masson de Morvilliers tuvo la virtud de, al herir profundamente el orgullo nacional, poner de acuerdo con las medidas represivas, incluso a aquellos que se veían gravemente afectados por ellas, como es el caso de los comerciantes de libros. El proyecto de Sancha no pudo llevarse a cabo y Floridablanca considerando que la nación española había sido ultrajada —y aquí no le faltaba cierta razón, pues el artículo que Masson había escrito sobre España tenía más de libelo que de otra cosa— organizó una campaña feroz contra las publicaciones francesas, aprovechando la ocasión para dictar normas cada vez más restrictivas en lo tocante a la introducción de libros, y toda suerte de publicaciones precedentes del país vecino.

LA ORGANIZACION DE LAS ADUANAS EN EL PAIS VASCO Y EL SANTO OFICIO

La incorporación de los territorios vascos a la Corona de Castilla se produjo mediante una serie de pactos que garantizaban la conservación de privilegios que los reyes castellanos al acceder al trono, juraban acatar. Uno de estos privilegios suponía la libertad comercial. Efectivamente, los habitantes de las provincias vascongadas, amparándose en lo abrupto de su paisaje y las dificultades que encontraba en él la agricultura, exigían la capacidad para poder traer del exterior los suministros necesarios para su subsistencia. Este privilegio, concedido por los reyes castellanos, suponía que la barrera aduanera quedaba desplazada al sur, siguiendo la línea del Ebro, mientras que la frontera política se mantenía desde la costa al reborde pirenaico (13). Navarra, anexionada a Castilla en 1512, gozaba de similares prerrogativas.

En Valmaseda, Orduña, Vitoria, Sangüesa, Tudela, Viana y Agreda se situaban las aduanas que enlazaban los territorios de libre comercio con el resto de la monarquía.

Ya hemos dicho que la Inquisición fue atribuyéndose un papel en la censura de libros casi desde su período fundacional, pero, oficialmente, se le adjudicó este cometido a partir de una carta del Papa a Carlos V en la que le pedía que, por todos los medios impidiera que los escritos de Lutero se introdujeran en los reinos hispánicos (14). En 1539, el Inquisidor General Tavera recibió de Paulo III la capacidad para actuar contra los lectores o poseedores de libros considerados heréticos. A partir de este momento la Inquisición tenía autoridad para proceder a la recogida de publicaciones consideradas heréticas o contrarias a la moral y las sanas costumbres. A tal efecto, desde 1557, en los puertos de la costa cantábrica y en pasos fronterizos con Francia, se instaló de modo permanente la figura del comisario del Santo Oficio, especie de juez de instrucción, encargado de proceder al registro de los barcos, en el caso de los puertos, o de los fardos que transportaban los viajeros y arrieros que transitaban a través de la frontera.

Los roces entre los Consulados de Bilbao y San Sebastián y los comisarios de la Inquisición serán constantes. Los Consulados se quejaban de que, la visita por parte de los comisarios a los buques que atracaban procedentes del extranjero, suponía un grave embarazo para las actividades mercantiles ya que, muchas veces, los ministros del Santo Oficio procedían con violencia y pocos miramientos, quedando obligados los responsables del barco registrado a pagar un «canon de visita» a la Inquisición. que encarecía los costes de amarraje. Además era frecuente que los comisarios requisasen publicaciones que no figuraban en los

(12) AHN. Consejos 5546-192 citado por DOMERGUE, L.

(13) TORQUEMADA, M.J. «Censura de libros y barreras aduaneras» en ESCUDERO, J.A. *Perfiles jurídicos de la Inquisición Española*. Universidad Complutense, Madrid 1989. p. 517.

(14) *Ibidem*, p. 519.

Índices Expurgatorios, actuando de forma arbitraria y poco conforme al mantenimiento de las buenas relaciones comerciales.

A pesar de todo, numerosos libros prohibidos lograron burlar la vigilancia en puertos y pasos de frontera y esto llevará con el tiempo a las autoridades tanto políticas como inquisitoriales a redoblar el celo y, apoyándose mutuamente, reforzar el «Cordón sanitario».

A mediados del siglo XVIII en las Aduanas Reales de la «Raya del Ebro» (Balmaseda, Orduña, Vitoria, etc.), se destacan comisarios del Santo Oficio para proceder al registro de los fardos conjuntamente con los funcionarios reales. También, y siguiendo esta política de endurecimiento de la censura, en las ciudades y villas de cierta importancia, situadas a lo largo del «Camino Real», que comunica la frontera de Irún con Madrid, la Inquisición nombra comisarios y comisionados, encargados de vigilar el posible contrabando de libros prohibidos. Así tenemos que, a partir del último tercio del siglo XVIII, el Santo Oficio pone especial interés en que nunca estén vacantes las comisarías de Irún, Tolosa, Villafranca, Escoriaza, Salinas de Leniz y, en general, todas las villas del «Camino Real», por donde se sospecha pueden circular libros procedentes de Francia en su penetración desde las «Provincias Exentas» hacia el interior de la Península.

Al producirse el estallido revolucionario en Francia, el gobierno español, profundamente preocupado por los acontecimientos que se desarrollaban al otro lado de los Pirineos, recabó nuevamente ayuda en la Inquisición. El ministro Floridablanca y su superintendente general de policía, Mariano Colón de Larreátegui, buscaron apoyo en esta vetusta institución en un desesperado intento por frenar la propaganda revolucionaria, que los apóstoles del espíritu de la «Libertad, Igualdad y Fraternidad» lanzaban hacia España.

Entre 1789 y 1792 fueron dictados ocho Reales Ordenes (15), en las que se fijaban las normas para el registro de aduanas, insistiendo en que éstas debía haber «dos revisores, uno real y otro comisario de la Inquisición, en cuya presencia debían abrirse los fardos y

(15) Las Reales Ordenes son las siguientes:

R.O. del 18 de Septiembre de 1789, mandando que «todas las estampas, papeles impresos y manuscritos, cajas, abanicos y cualquier otra cosa alusiva a las ocurrencias de Francia se retuviese en las aduanas y remitiesen al Rey por el ministro de Hacienda...»

R.O. 9 de Enero de 1790 «Se prohíbe la vntroduccion y curso en estos Reynos de los papeles relativos al mismo objeto, mandando a todos entregasen inmediatamente los que tuviesen...»

R.O. 10 de septiembre de 1791, Se repite la Real Cédula anterior «mandando denunciar a las personas que retuviesen papeles relativos a los sucesos de Francia, bajo pena, los que lo hiciesen de ser procesados y castigados por infidentes...»

R.O. 9 de diciembre del mismo año. «Se prohíbe la introducción y curso de los dos tomos del Diario de Física correspondientes al año 90, y los que en adelante se publicasen de esta obra u otra qualquiera en Francés sin licencia expresa de S.M.W.»...

R.O. 15 de julio de 1792 «Que todo papel impreso o manuscrito que tratase de la Revolución de Francia se remitiese directamente por los administradores de las Aduanas al Ministerio de Hacienda, que dispondría se entregasen a sus dueños quitadas la alusiones».

R.O. 15 de Octubre 1792 «Que en todo registro de Aduanas se retuviesen los libros y papeles; que hubiese en todos dos revisores, uno Real y otro de la Inquisición. Que por la aduana se diese aviso al Real de los fardos que llegasen; y este comisario Real señalase el día y hora al de la Inquisición. Que ambos asistiesen al abrir los fardos en presencia de uno o de los dos principales de la Aduana, haciendo lista triple de los libros conforme se fuesen extraiendo, una para el Revisor Real, otra para el de la Inquisición y otra para la aduana, todas firmadas de los asistentes».

R.O. del 25 de Noviembre de 1792 «Se renuevan las prohibiciones hechas por Real Cédula del 10 de Septiembre de 1791 y por las demás órdenes con expresión particular del Monitor y para que se renovase también el Edicto que afines de abril del mismo año fijó la sala de Alcaldes en los Cafés, Villares y demás lugares públicos, encargando muy particularmente el Consejo la vigilancia y exacta observancia que tomase. Con la misma fecha se circuló oficio a los ministros de las Cortes extranjeras para que no permitiesen usar de los papeles de Francia a ninguna persona de dentro o fuera de su familia».

formarse lista triple de los impresos y manuscritos que se hallasen, firmado por los asistentes, quedando en poder de la Inquisición todo lo ya condenado o meramente sospechoso» (16).

Sin embargo, la literatura prohibida circuló con cierta facilidad por las «Provincias Exentas» especialmente a partir de los sucesos revolucionarios de Francia, y, más concretamente cuando la Convención propugnó exportar la Revolución a los demás pueblos del mundo. El «Aviso a los Españoles» redactado por Condorcet (17), no halló mucho eco a este lado de los Pirineos, probablemente porque no supo conectar con las aspiraciones profundas de los españoles, pero sabemos que en los territorios de Guipúzcoa y Vizcaya circularon numerosas copias de ese grandilocuente panfleto (18), que animaba al pueblo español a «liberarse de la tiranía extranjera de los Barbones».

El «cinturón sanitario» rigurosamente establecido cuando comenzó a funcionar, pronto decayó; las rencillas entre los revisores inquisitoriales y los reales eran moneda corriente (19).

Por otra parte, el tribunal de Logroño no estaba a la altura de las circunstancias y muchos esfuerzos, debido a la desastrosa organización, resultaban totalmente estériles. Hay una carta escrita por los inquisidores de Logroño al Consejo que ayuda a comprender los problemas más graves que afectaban al Tribunal en cuyo distrito se producía la mayor penetración de publicaciones francesas. La carta lleva la fecha del 6 de mayo de 1802 y entre otras cosas dice así «...no solo en la residencia de este pueblo sino también en las principales cabezas del partido de todo el territorio carecemos de calificadores o comisarios que posean bien el idioma francés y vemos con mucho dolor retardado el curso de los expedientes en libros» (20). Para intentar atajar este problema se busca una solución de urgencia «...por ignorarse la lengua francesa, no solo nuestros secretarios del secreto, sino también los demás ministros dependientes de una vista acordamos que Don Fco. David, Presbytero emigrado francés, bastante capaz e instruido y de la confianza del tribunal «sea comisionado a tal efecto. Hay que pensar en la situación de desamparo lingüístico en la que debían encontrarse los Inquisidores de Logroño, para decidirse a nombrar, calificador de libros del Santo Oficio, nada menos que a un sacerdote emigrado francés. Efectivamente, a pesar de haber escapado de Francia por negarse a prestar el «juramento cívico», los sacerdotes emigrados eran observados a distancia y con profundo recelo por sus congéneres ibéricos. Un abismo

R.O. del 26 de Noviembre de 1792 relativa al puerto de San Sebastián »Se comunicó al Capitán General de San Sebastián para que no habiendo aduanas en aquella ciudad y respecto a que en el muelle se hace manifestación al juez de contrabando de todo lo que se introduce de Reinos extranjeros, no impidiesen a los Comisarios del Santo Oficio el reconocimiento y recogimiento que según sus reglas tengan que hacer de libros y otros impresos al tiempo de reconocer los fardos en el muelle, antes bien prestase el auxilio necesario para dicho fin»...

(16) AHN Inq. leg.^o 2.242. Carta del Consejo al tribunal de Logroño en la que se notifican las Reales Ordenes del 15 de julio de 1792 y del 15 de Octubre del mismo año sobre la presencia de ministros del Santo Oficio en las aduanas.

(17) BADINTER, E. y R., *Condorcet, un intelectual en politique*. Editions Fayard, París 1988, p. 506. El comisario del Santo Oficio en Bilbao, Joaquín Ampuero envía una carta a la Inquisición de Logroño, fechada el 6 de marzo de 1793, en la que considera que el «avis aux Espagnoles» es el fulminante que va a provocar la explosión revolucionaria en la monarquía española. «Si los muchos papeles que antes de ahora han introducido los franceses, preparaban la mina para la insurrección en estos Reinos de España, el de las diversas Advertencias arriba va la mecha para su explosión» en AHN, Inq. leg.^o 4.429/6.

(18) AHN Inq., leg.^o 2.244.

(19) TORQUEMADA, M.J. Op. Cit., p. 524. El Consejo de la Inquisición se quejó en numerosas ocasiones por este motivo a las autoridades civiles.

(20) AHN Inq., leg.^o 2.245/1.

inabarcable separaba dos concepciones diferentes de entender el sacerdocio, y los españoles concluían que «a pesar de todo, son franceses» (21).

En la misma carta se pasa lista a otros defectos y no leves del Tribunal de Logroño «Con los innumerables libros que por tiempo inmemorial se han colocado sin orden ni método en dos piezas del secreto no se ha podido formar relación más individualizada y exacta. Pero para precaver en lo sucesivo, y evitar esta confusión, en virtud de la acertada orden de V.E., hemos mandado hacer un cuaderno donde se ban anotando con la expresión debida todos los sujetos que entregan o remiten libros los entregan con cautela y reserba por manos de algunos confesores, solicitando y reencargando el tribunal que de ninguna manera conviene descubrir sus propios dueños, por conserbar el individual sigilo del sacramento de la penitencia, suspendemos ulteriores diligencias y nos tranquilizamos con dejar custodiados en el secreto para que no se difunda el veneno a otras personas que puedan leerlos» (22).

En pocas palabras, el desorden que, por tiempo inmemorial, aquejaba a los libros colocados en el «secreto», continuaría afectándolos sin remedio porque los ministros del Santo Oficio en Logroño no parecían muy motivados para cambiar un proceder viciado por la desidia.

Cuando unos años más tarde, en 1808, el ejército napoleónico entró en la ciudad, los ministros del Tribunal abandonaron la sede sin haber previsto siquiera la evacuación de los archivos, como sucedió durante la Guerra de la Convención, en que los papeles fueron trasladados a la Serranía de Cameros (23). Con este motivo, el pueblo entró en las dependencias inquisitoriales y se apoderó de los papeles y los libros custodiados en el secreto. Santiago González Mateo (24) en sus memorias dice que «Toda mi causa criminal ha llegado a mi poder después de haver corrido (como todas las mas de la inquisición de Logroño) por corrillos, plazas y cocinas, abandonadas por los inquisidores en la salida, quando entraron los franceses en dicha ciudad; pero tomaron la huida muy de antemano y así como ningún ajuar propio de ellos quedó expuesto a la casualidad ni saqueo, con mucha mayor razón debieron atender a ocultar o quemar procesos tan ignominiosos». En estos sucesos desapareció gran parte de la documentación de este Tribunal, que, o bien quedó oculta en poder de particula-

(21) Sobre el clero emigrado francés se han hecho varios estudios uno de los más conocidos es el de GEOFFROY DE GRANMAISON, M. «Le clergé français en Espagne pendant la Révolution», *Le Correspondant*, CLXIV. 1891. SIERRA NAVA, L. «Mil abates franceses, fugitivos de la Revolución, huéspedes del Señorío (1792-1798)», *Estudios Vizcainos*, n.º 1, 1970, pp. 79-97, ha estudiado el caso del clero francés refugiado en Vizcaya. Hay algunos otros estudios más sobre este tema pero esperamos que se publique la tesis doctoral recientemente leída «El clero francés refugiado en España durante la Revolución Francesa». (1791-1815) de la que es autor el profesor Manuel Gutiérrez García de Brazales, que sin duda aportará conclusiones definitivas sobre este tema —que como tantos otros— ha sido bastante descuidado por la historiografía española. HERR, R. Op. cit., pp. 247-256. Da una visión beatífica de la llegada y el establecimiento en suelo español de los aproximadamente 6.800 clérigos franceses refractarios que buscaron asilo al sur de los Pirineos, y que no concuerda con la documentación relativa a este suceso del Santo Oficio, en la cual se puede apreciar que la Inquisición recelaba profundamente de este colectivo religioso, a pesar de sus posiciones netamente antirrevolucionarias, y encargó a todos sus ministros que vigilaran sin perder detalle a los abates emigrados.

(22) AHN Inq., leg.º 2.245/1.

(23) AHN Inq., leg.º 2.245/2. Carta de los inquisidores de Logroño al consejo avisando de que el archivo del Tribunal fue trasladado a la Serranía de Cameros.

(24) GONZALEZ MATEO, S. «Vida de don Santiago González Mateo, escrita por él mismo» —*Bulletin Hispanique*. 1917. Está copiado de un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Mss 19.500. Este cura, que llegó a ser Presbítero de Laguardia, había tenido un proceso con el Santo Oficio y en sus memorias cuenta, entre otras cosas, detalles interesantes de como la Inquisición llevaba los procesos en los años finales del siglo XVIII. En pp. 375, 376 explica el abandono en que los inquisidores dejaron la sede del Tribunal y el saqueo por parte de curiosos que cogían procesos y otros escritos para figonear las historias de sus vecinos. Esta es una de las causas de que se hayan perdido tantos documentos del Tribunal de Logroño.

res o fue utilizada para menesteres tan variopintos como servir de envoltorio a los productos de una chacinería y otros que no mencionamos pues entran en el campo de la escatología.

Después de la Guerra de la Independencia, el Tribunal de Logroño reanudó su actividad sin pena ni gloria. Las circunstancias por las que atravesaba el País no invitaban a trabajar con ahinco, los funcionarios cada vez eran más escasos y estaban peor pagados pues las rentas del tribunal llegaban dificultosamente para subvenir a los gastos mínimos y, a veces, ni siquiera alcanzaban para pagar los sueldos de los ministros (25).

El sistema aduanero de la monarquía de Fernando VII mantenía el mismo desfase entre fronteras políticas y barreras aduaneras que venía siendo igual desde la incorporación de los territorios del Norte a la Corona Castellana. Una Real Orden de 1816 dejaba en manos de la Inquisición el control de libros en aduanas y pasos fronterizos (26), con lo que las funciones del Subdelegado de Imprentas y del Revisor Real, quedaban minimizadas ante el omnipresente Tribunal, aunque, su permiso seguía siendo necesario para introducir libros en la monarquía española.

En la aduana de Vitoria se seguían registrando los fardos de libros y, en teoría, continuaban trabajando al alimón un revisor regio y otro inquisitorial, aunque la realidad solía diferir bastante de esa estampa ideal, y en muchas ocasiones no había nadie para proceder al reconocimiento de los libros, con lo cual los trámites se eternizaban y la importación de publicaciones quedaba entorpecida al no poder salvar con cierta rapidez el control vitoriano (27).

La Inquisición fue abolida el 15 de julio de 1834, el sistema aduanero peculiar de las «Provincias Exentas» duró todavía unos años más, hasta 1841.

Sin embargo, durante esos años de desfase entre la desaparición de ambas instituciones, la aduana de Vitoria llevó una vida azarosa. La Primera Guerra Carlista, que había estallado en octubre de 1833, desmanteló a los órganos de gobierno de los territorios vascos. En muchos casos se produjo un desdoblamiento de los mismos: con pocos kilómetros de distancia funcionaban dos diputaciones, una liberal y otra carlista y en otros casos el fraccionamiento administrativo fue todavía mayor. Durante estos años oscuros, en que las aduanas cambiaban constantemente de situación, siguiendo los vaivenes de la guerra, no sabemos si funcionó eficazmente la censura de libros, pero todo nos lleva a pensar que, desaparecida la Inquisición, la aduana de Vitoria dejó de ser un impedimento de paso para la introducción de publicaciones en España. Unos años después, cuando las aduanas fueron trasladadas definitivamente a la costa y la frontera, otras instituciones se encargaron de canalizar la labor de la censura. Pero ésta es ya otra historia.

VITORIA, ADUANA DESDE EL SIGLO XIII

Desde los tiempos más antiguos el lugar donde se asienta Vitoria fue una importante encrucijada de caminos (28) que ponía en contacto los puertos del Cantábrico Oriental con la

(25) En el Archivo Provincial de Alava, Fondo Samaniego, Sig. 57 n.º 11, 12 y 13 aparecen las cuentas de la Inquisición de Logroño de los años 1815, 1817 y 1818. Ignoro el motivo por el que se encuentran en este lugar, pero tiene muchísimo interés su estudio para conocer los medios de financiación del Tribunal. Beneficios sobre parroquias, censos, alquileres de edificios propiedad del Santo Oficio, arriendos de canongías, etc., componen la heteróclita hacienda de la Inquisición, que en esos años de penuria económica se veía muy mermada.

(26) TORQUEMADA, M.J. Op. cit., p. 526.

(27) AHN, Estado leg.º 3.135, carta del conde de Perelada, desde París, en ese sentido.

(28) GONZALEZ MINGUEZ, C. «Vitoria en la Edad Media»,. Actas del I Congreso de Estudios Históricos celebrado en Vitoria del 21 al 26 de septiembre de 1981, Edita el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1982, p. 565.

Castilla interior y a través del Valle del Ebro, comunicaba a las tierras vascas y castellanas con los reinos de Aragón y Navarra.

En 1187, Sancho el Sabio de Navarra, en la aldea de Gasteiz, fundó, a fuero de Logroño la Villa Nueva de Vitoria (29). La recién creada población se situaba en un pequeño cerro que se levantaba en unos veinticinco metros sobre las tierras que le rodeaban. Los vitorianos, lo mismo que los demás habitantes de los territorios vascos, basándose en la pobreza natural de su tierra y la incapacidad de arrancarle frutos suficientes para su sustento, consiguieron privilegios notables de los reyes castellanos. En 1286 se quejaban de ser tan «pobres que non han términos nin viñas nin heredamientos en que vivían» (30). Es decir, que para subsistir necesitaban traer de fuera lo indispensable para su manutención. Era un paraje de los llamados de «acarreo» porque todos los productos debían ser transportados desde otros lugares. Sabemos que, aproximadamente por esas fechas ya existía una aduana en Vitoria para controlar los productos que desde allí pasaban a Castilla. Poco después, en 1296, se constituyó la «Hermandad de la marina de Castilla con Vitoria» (31) que reunía a los puertos del Cantábrico junto con la ciudad del Zaborra en una agrupación poderosa para la defensa de los intereses económicos comunes. «La Hermandad de la Marina», estableció relaciones mercantiles con los puertos franceses del Atlántico, con Flandes, con Inglaterra e, incluso, con la pujante Hansa germánica. La capacidad comercial de Vitoria, se vio incrementada con la concesión real de dos Ferias Francas al año, otorgada por Enrique III en 1399, y, en 1466, un Mercado Franco los jueves de cada semana, establecido por Real Orden de Enrique IV (32). La importancia económica de Vitoria, situada estratégicamente en el eje de caminos que comunicaba el tráfico mercantil entre Castilla, los reinos de Navarra y Aragón y el resto de las grandes regiones comerciales del Occidente Europeo, no dejó de aumentar a todo lo largo del siglo XV.

Juan II, en 1435, perfeccionó el sistema aduanero castellano, prescribiendo un arancel para los productos que entraban y salían del reino y estableciendo que el tráfico mercantil debía pasar forzosamente por unos determinados puntos, que más tarde se llamarían «puertos secos». En estos lugares se situaron las «Casas de aduanas» (33), acabando así con la antigua provisionalidad de las oficinas de pago de los derechos de entrada y salida de las mercancías. Vitoria, que ya tenía una tradición aduanera de dos siglos de antigüedad vio confirmada y acrecentada su calidad de fielato entre las «Provincias Exentas» y la «Castilla Estricta» (34).

En la documentación inquisitorial de los siglos XVI y XVII, aparecen algunos casos de requisa de libros prohibidos o sospechosos en la aduana vitoriana en esa época. Sabemos que desde mediados del siglo XVII, el comisario del Santo Oficio en Vitoria procedía al registro de los libros que se exportaban hacia Castilla. Pero será a partir del tratado de Utrecht, en 1712, cuando la visita del comisario inquisitorial se convierta en un requisito imprescindible para que los libros que llegan a la aduana, procedentes de otras tierras, consigan el pertinente visto bueno para pasar a Castilla, A través de unos cuantos ejemplos, elegidos entre la

(29) FLORANES Y ENCINAS, R. *Memorias y Privilegios de la M.N. y M.L. Ciudad de Vitoria*. Biblioteca de historia Vasca. Colección de obras y documentos inéditos relativos a la historia del País Vasco. Vitoria 1905, p. 24.

(30) GONZALEZ MINGUEZ, C. Op. cit., p. 578.

(31) GARCIA DE VALDEAVELLANO, L. *Curso de Historia de las Instituciones españolas*. Alianza Editorial. Colección Alianza Universidad Textos. Madrid 1982, p. 278.

(32) FLORANES Y ENCINAS, R. Op. cit., p. 59.

(33) GARCIA DE VALDEAVELLANO, L. Op. cit., p. 605.

(34) TORQUEMADA, M.J. Op. cit., p. 521.

abundante documentación que aparece en el Tribunal de Logroño, relacionada con la censura de libros, y que por su naturaleza nos han parecido particularmente significativos, vamos a intentar dar una visión sobre el que los autores no se han puesto todavía de acuerdo (35). ¿Influyó la Inquisición en el secular atraso español? ¿Fue decisivo el papel de la censura a la hora de entorpecer la difusión de la «nueva cultura» que, a través de Francia, intentaba penetrar a la Península? Las opiniones divergen al entrar a analizar este tema vidrioso que se escurre entre la pluma de los historiadores haciendo que sus investigaciones se extravíen en un dédalo de conclusiones contradictorias. Forzosamente el Santo Oficio tuvo un peso específico importante en la estructuración de una cierta mentalidad española que ha subsistido hasta nuestros días. Al menos eso se desprende al estudiar ciertas minorías ligadas al funcionamiento de la Inquisición a lo largo de generaciones. Eso es todo lo que se puede decir por el momento. Para llegar a elaboraciones más ambiciosas será necesario conocer más profundamente la documentación inquisitorial y dejar de lado los prejuicios que, inevitablemente, acompañan al investigador cuando se propone abordar un tema tan conflictivo.

QUEMA DE LIBROS Y ENCAJES DE FLANDES

En noviembre de 1721 el exceso de celo de las autoridades vitorianas estuvo a punto de provocar un incidente diplomático. Un paquete de libros y encajes que, procedentes de Flandes venían para el embajador de Inglaterra en Madrid, no llegaron a su destino. La queja del diplomático hizo que, las autoridades españolas, intuyendo que por tratarse de libros, el Santo Oficio podría tener alguna información sobre los hechos, escribieran al Tribunal de Logroño pidiendo explicaciones al suponer que dicho paquete habría sido interceptado en la aduana de Vitoria.

El Inquisidor decano de Logroño, Dn. Andrés de Arratabe, encargó una investigación para aclarar los hechos al comisario del Santo Oficio en Vitoria, Agustín de Baigorri, rogándole encarecidamente que se enterase de «qué libros fueron quemados, en qué tiempo y con qué motivo, de donde venían, para qué persona y quienes los remitían» (36). «Agustín de Baigorri, penitenciado de la iglesia colegial de Santa María, para esta comisión nombró notario a Joseph Ibañez de Echebarria, canónigo de la misma iglesia».

De las primeras pesquisas realizadas por los dos sacerdotes se dedujo que Joseph Jacinto de Alava, diputado de la provincia, también había tenido noticia de la quema de libros y otros efectos llevada a cabo por orden del alcalde de Vitoria. Joseph Jacinto de Alava se había enterado de los hechos por una confidencia de Pedro González de Chavarrí. Cuando se produjo la quema de los libros era alcalde de Vitoria Dn. Juan de las Cuevas, que tenía jurisdicción real para el registro de Correos. El informe enviado a Logroño dice que «En virtud de las Ordenes Reales, Juan de las Cuevas había hecho quemar públicamente, fuera del Portal del Rey, diferentes paquetes de encajes muy ricos junto con algunos libros que había encontrado dicho alcalde dentro de la valija que traía el correo de Flandes». Ante la comisión encargada por la Inquisición de Logroño testifica también Joseph de Aguirre, vecino de Vitoria «que para su declaración exhibió el instrumento hecho el día martes diez y seis de septiem-

(35) DEDIEV, J.P. «¿Es responsable la Inquisición en el atraso económico de España? Elementos para la respuesta». En BENNASSAR, B. y otros. *Orígenes del atraso económico español*. Editorial Ariel. Col. Ariel Historia. Barcelona 1985.

Son muchos los autores que han especulado sobre la responsabilidad de la Inquisición y más particularmente sobre el aspecto de parapeto frente a las nuevas ideas y el progreso científico que significó la censura ejercida por el Santo Oficio. Las conclusiones a las que han llegado son contradictorias, aunque casi todos aceptan que jugó un importante papel en la configuración de la mentalidad española.

(36) AHN Inq., leg.^o 1.680.

bre del año próximo pasado del mil setecientos veinte y uno ante Don Juan de las Cuevas, Alcalde que fue de esta dicha ciudad de Vitoria, en el qual se hallan dos capítulos del tenor siguiente.

- Un paquetillo primera cubierta a Don Joseph de Palacios, guárdele Dios muchos años, consultor de las Postas de España en Madrid. Segunda cubierta a Don Isidro Fajardo, guárdele Dios muchos años, cavallero de la Orden de Calatrava, residente en Madrid. Tercera cubierta a Monsieur de Iriarte, Madrid».

A continuación aparece la lista con los títulos de todo lo que contenían los paquetillos, pero del fardo destinado al embajador de Inglaterra no se hace mención alguna.

Juan de las Cuevas, el antiguo alcalde de la ciudad, también es llamado a declarar y dice que, por Real Orden «todos los dichos géneros que no vinieran con los despachos de Sanidad y otros que para su introducción en estos Reynos debían ser necesarios (debían ser destruidos). En uno de los días del mes de septiembre de dicho año de mil setecientos veyn-te y uno, arreglándose a dichas órdenes registró una valija y en ella encontró diferentes papeles y algunos libros con otros géneros, y faltando para su transporte los despachos necesarios los mandó por su auto quemar públicamente fuera del portal que llaman del Rey». Normalmente el despacho de Sanidad se realizaba en los puertos de mar o en la frontera, donde funcionarios reales destinados al efecto revisaban los fardos, y si cumplían los requisitos estipulados por la normativa vigente, les otorgaban el permiso pertinente para poder seguir hasta su destino. Por algún motivo que desconocemos, la valija de Holanda carecía de los despachos obligatorios para circular por el reino y el alcalde de Vitoria no tuvo reparo en mandarlos quemar.

El informe de las averiguaciones realizadas es enviado a Don Andrés de Arratabe, Inquisidor de Logroño. Joseph Jacinto de Alava, diputado provincial aprovecha la ocasión para mandar a su sobrino con el mensaje y añade una carta personal para el inquisidor Arratabe, que consta en el expediente, en la que le ruega que: «Apadrine al portador, que es opositor a un beneficio que se probee por el Señor Obispo el 21 del corriente, en el lugar de Gomecha, zerca de esta ziudad, ynterponiendo su mucha autoridad con el provisor y su Ylustrísima para que sea atendido el pretendiente Don Domingo Gonzalez de Otazu, mozo de prendas y gallardo estudiante». Este tipo de peticiones a cambio de una colaboración más o menos puntual es una de las constantes en la correspondencia de los ministros del Santo Oficio. Nadie parece dispuesto a trabajar «gratis et amore» para la Inquisición, siempre hay tendencia a pedir algo a cambio. Un mes más tarde el diputado vuelve a la carga y en una segunda misiva al Inquisidor Arratabe le manifiesta «Estimo a V.M. el favor que me hace en su carta de quererse ynteresar en faborecer a mi ayjado para con el provisor en la pretensión que tiene de beneficio; es mozo de prendas y si no se atravesasen dos sacertotes, tengo por sin duda saldría con su yntento»..

A lo largo de los cientos de legajos que llevamos estudiados, nos llama poderosamente la atención ver como el vicio de las «recomendaciones» o «enchufes» eran moneda corriente en la provisión de puesto tanto en las esfera política como en la eclesiástica, hace ya varios siglos. La documentación del Santo Oficio está plagada de ejemplos de este vicio nacional.

Por lo que se deduce de la lectura del resto del expediente, de los libros y encajes que iban para su excelencia el embajador de Inglaterra no quedó ni rastro. Al no poder dar una explicación coherente de este episodio, los comisionados de Vitoria no vuelven a mencionarlo, pero aprovechan la ocasión para enviar los «paquetillos» citados por el testigo Joseph de

Aguirre, que sin duda permanecían en el depósito de la Aduana de Vitoria, al Consejo de la Suprema Inquisición para su revisión.

Unos meses después (37), en marzo de 1722 llega la calificación de los libros dirigidos a Don Isidro Fajardo, de la Orden de Calatrava, al Tribunal de Logroño. Procede del Colegio Imperial de Madrid, el calificador es el padre Claudio Adolfo de Malboan S.L. Ya apuntamos que, como dice Defourneaux, desde los primeros años del siglo XVIII, los jesuitas acapararon la censura de libros y escritos, y la influencia de la Compañía sobre el Tribunal de la Inquisición no cesó de crecer hasta el reinado de Carlos III (1759-1 788) (38).

He aquí el informe del jesuita Malboan:

«El primer libro 'Reflexiones, sentencias y máximas morales', con notas históricas y políticas de Amelot de Hussye, impreso en París en 1714, no tiene problema. Es una Polianthea pequeña, alfabética, en que por las letras va poniendo algún puntito de erudición o sentencias y dichos de los antiguos».

La segunda obra expurgada ya es otra cosa. Se trata del libro titulado «Reflexiones serias e importantes de Robinson Crusôe, con la visión que tuvo del mundo Angélico» estaba editado en Amsterdam en 1721 y escrito en francés.

Malboan puntualiza «Este va por otro lado, porque va al ateísmo. Quiso presentar un libro de viajes y establecer una fábula a la manera de Don Quixote o del francés Tellemac, pero este es todo lo contrario, no pierde ocasión de desvergonzarse contra la iglesia católica».

El tercer libro también está prohibido. Se titula «Tratado de la autoridad del Papa». Sin nombre de autor. Impreso en la Haya, en 1720, en francés. Según el padre Malboan «Pretende mostrar que la autoridad del Papa, que toda España tenemos por de fé, es quimera (...) Este libro, especialmente en España, es perverso, escandaloso, herético, irreverente, scismático y abominable, no merece lugar entre las librerías sino entre las llamas.»

Como podemos ver, los tres libros expurgados por el calificador Claudio Adolfo de Malboan, están escritos en francés, aunque únicamente uno, el primero, ha sido editado en Francia. Esta va a ser una constante a lo largo del siglo XVIII (39). Venecia, Amsterdam y Ginebra serán algunos de los centros de edición más importantes durante esta época, mientras que de París u otros lugares de Francia llegan los libros en número bastante modesto si nos atenemos a las proporciones. Esta situación tenderá a invertirse a medida que avanza el siglo XVIII (40).

CENSURA Y REVOLUCION FRANCESA

Durante los años que preceden al estallido de la Revolución Francesa, la aduana de Vitoria trabaja cada vez con más ahínco en la calificación previa de los libros que llegan procedentes del extranjero. La mayoría de ellos no figuran en los Indices Expurgatorios y corres-

(37) Ibidem.

(38) DEFURNEAUX, M. Op. cit., p. 27.

(39) Ibidem, p. 85. Los libros en lengua francesa son los más numerosos en las listas de la censura inquisitorial, pero la mayoría han sido impresos en otros países en lugar de en Francia como parecería natural. Otro tanto ocurre con los libros juzgados «inofensivos» por el Santo Oficio.

(40) DOMERGUE, L. *Le livre en Espagne au temps de la Révolution Française*. Edition des Presses Universitaires de Lyon. Lyon 1984, p. 148. La Convención recurrió a los servicios de españoles refugiados en Francia (Marchena, Santivañez, etc.) para orquestar una propaganda revolucionaria dirigida hacia la Península. Las publicaciones francesas recogidas por los funcionarios reales e inquisitoriales se multiplicaron porque la Revolución Francesa entró en una fase de proselitismo internacional.

ponde a los calificadores de Vitoria —cuyo número crece en consonancia con el aumento de publicaciones que recaban en la aduana— decidir el diagnóstico que debe aplicarse en cada caso a las obras expurgadas: prohibidas «in totum», es decir, totalmente en el castigo que sufren todas aquellas publicaciones (o manuscritos) que, a juicio de los calificadores, hacen apología de las «ideas democráticas». Por supuesto las obras de los filósofos que han aceptado como pioneros en la difusión del «espíritu de las luces» están todas prohibidas: Rousseau y Voltaire figuran en cabeza, de los autores «damnatae memoriae» lo que supone que, todas sus obras, publicadas o por publicar quedaban absolutamente prohibidas en todos los territorios de la monarquía española. Montesquieu, Locke, D'Alambert, Hoffman... figuran entre el numerosísimo elenco de autores cuyas obras resultaban total o parcialmente prohibidas por la censura inquisitorial.

Los calificadores de Vitoria recibían las listas de libros prohibidos pero, como ya hemos dicho, su misión consistía en expurgar publicaciones que, por diferentes motivos, a pesar de no figurar en el Índice, por su contenido podían considerarse lesivas a la Religión y las sanas costumbres de los españoles y por ello debían ser prohibidas. La fama de los calificadores de Vitoria irradiaba todo el distrito inquisitorial de Logroño hasta el punto que, a veces, eran los propios particulares los que se dirigían a la Comisaría del Santo Oficio en esta ciudad pidiéndole que se les expurgasen algunos libros de su propiedad pues, al leerlos, les habían entrado dudas sobre su posible peligrosidad moral. Este es el caso del paquete de libros enviado desde Motrico por el cura beneficiado de dicha villa don Pasqual de Churruca en Agosto de 1785. Entre las obras remitidas hay una que al propio Churruca le parece «perniciosa por hallarse sembrada de errores, falsos principios y calumnias ofensivas» (42). La obra, titulada «Ceremoines et contumes religienses de tous les peuples du monde», impresa en Amsterdam en 1783, no estaba prohibida ni figuraba en ningún índice expurgatorio; posiblemente, por este motivo, el sacerdote Churruca, hombre culto y erudito según se deduce de sus lecturas, la había adquirido no sabemos donde ni como. «Como mi profesión no es la theología —continúa Churruca en su carta al comisario de Vitoria— y por otra parte solamente de paso he corrido esta obra, deseo saber la opinión de los calificadores» (43). Con el paquete de libros, que además de la publicación referida, contiene un diccionario enciclopédico en lengua francesa y un tomo de las obras del abate Chaulieu, Churruca envía también una lista de libros, la mayoría de su propiedad, que desea sean expurgados por los ministros del Santo Oficio.

La comisaría de Vitoria envía el informe al Tribunal de Logroño para que dé su opinión sobre el caso. Después de deliberar sobre el tema, el 20 de Octubre de 1785, el fiscal del Santo Oficio de Logroño remite una carta a don Pasqual de Churruca en los siguientes términos: «En vista de la que V.M. ha escrito a nuestro secretario Marcos Josef de Soto y Olaso, con fecha del 3 del corriente y del 23 del mismo hemos acordado que, acompañándose V.M. de otro eclesiástico de su satisfacción, que hará de notario, disponga que se quemen a su presencia los libros siguientes: el Fran Gerundio perteneciente a Don Agustín Francisco de Echaverría, las obras de Mr. Rousseau, el folleto intitulado «Carta familiar a Don Pedro de Meia» y el tomo de Federico Offman con el tratado del Proterio inserto en él».

Estas publicaciones, que figuraban en las listas enviadas por Churruca a Vitoria han de ser quemados, ya lo dice claramente la nota conminatoria del Tribunal de Logroño, que aña-

(41) DOMERGUE, L. *Tres calas en la censura dieciochesca (Cadalso, Rousseau, Prensa Periódica)*.

Institut d'études hispaniques et hispanoamericaines. Université de Toulouse-le Mirail collection «Theses et Recherches» n.º X. 1981.

(42) AHN Inq. leg.º 4.500/1, exp. 14.

(43) *Ibidem*.

de «Así mismo, hemos acordado que con persona segura, cuando haya proporción, remita V.M. al magistral de la colegiata de Vitoria, Don Miguel Ramón de Zumalave (que con esas fechas hace de comisario de Vitoria, por enfermedad del titular, Rafael Ruiz de Olarte) el gran tomo de medicina que expresa en su carta sin nombrar al autor, a no ser que éste sea el Federico Offman, que va mandado quemar, la traducción inglesa del Nuevo Testamento y el libro intitulado «Oevres de l'Abée de Chaulieu, augmenté par Mr. de Saint Marc», previniéndole a dicho magistral que en ocasión oportuna los envíe por conducto seguro a este Tribunal a fin de reconocerlos y averiguar si están prohibidos» (44). Esta carta es un documento muy explícito sobre el funcionamiento de la comisaría del Santo Oficio en Vitoria. Podemos ver que gozaba de cierta autonomía como se deduce de los expedientes que citaremos a continuación, calificando los libros de Churruca, pero las decisiones finales incumbían únicamente al Tribunal del distrito, es decir, a Logroño.

Para no dejar ningún cabo suelto, en el informe está la carta del notario nombrado en Motrico por Don Pasqual de Churruca, certificando la quema de libros. Dice así. «Don Juan Manuel de Arriola, Presbítero Perpetuo de la Parroquia de esta Villa de Motrico, certifico que el Licenciado Don Juan Pasqual de Churruca ha quemado en mi presencia, oi, día de la fecha, los libros que contiene la orden precedente y para que conste io firmo en esta insinuada villa de Motrico a 25 de Octubre de 1785» (45). El auto de fé de los libros prohibidos se llevó a cabo con todos los requisitos. En cuanto a la obra «Ceremonies et coutumes religienses de tous les peuples du monde» que estaba en el origen de este proceso de expurgación, no debió correr una suerte mejor. Los calificadores de Vitoria la consideraron apta para las llamas. Fray Manuel de San José, del Real Monasterio de la Estrella, de la orden de San Gerónimo, envía su calificación al comisario de Vitoria de 24 de abril de 1786 y en ella dice que «La obra Ceremonias es pernicioso y debe prohibirse in totum (...) las estampas 32 y 33 de este quaderno están llenas de la desvergüenza de pinturas de mancebos y manzebas desnudos y desnudas, tanto mas perjudiciales quanto es mas elegante el arte de la pintura y sus escorzados» (46). La opinión de los otros dos calificadores va en el mismo sentido así que, alertado el Consejo de la Suprema Inquisición, según el procedimiento habitual, el libro quedó incluido en la lista de obras prohibidas «in totum» el año 1788. «La obra debe prohibirse in totum ahun para los que tengan licencia de leer libros prohibidos por ser imía, que promueve el deismo y materialismo y apoya el tolerantismo de todas la religiones menos la Cathólica a la que insulta en sus docmas y costumbres». El edicto fue publicado en mayo de 1789.

Defourneaux (47) dice que normalmente pasaban dos o tres años desde que la obra era denunciada o confiscada por las autoridades locales del Santo Oficio (generalmente este trabajo era competencia de los comisarios) hasta que su título aparecía en un edicto inquisitorial. Este es aproximadamente el tiempo que tardó en ser prohibida, desde su delación, la obra «Ceremonies et coutumes». Evidentemente Defourneaux está en lo cierto cuando añade que «ese lapso de tiempo era ampliamente suficiente para que (la obra en cuestión) encontrase en España numerosos lectores». No cabe duda de que, con los elementos de la época era difícil superar la velocidad de funcionamiento de la Inquisición. El Santo Oficio hacía lo que podía para impedir la entrada de literatura pernicioso, y la aduana de Vitoria colaboraba todo lo eficazmente que sus medios le permitían en esta ingrata tarea, pero los resquicios y quebraduras de la malla inquisitorial eran numerosos y muchísimas publicaciones

(44) Ibidem.

(45) Ibidem.

(46) Ibidem.

(47) DEFOURNEAUX, M. Op. cit., pp. 53-54.

lobraban salvar los obstáculos y llegar a manos de particulares con menos escrúpulos de conciencia que Don Pasqual de Churruca.

Uno de los problemas a la hora de requisar los libros o estampas que por su contenido eran susceptibles de ser requisados, residía en la entidad de sus propietarios. Desgraciadamente, en esto el Santo Oficio no era una excepción, siempre han existido diferencias ante la ley según la calidad de las personas que se enfrentaban a ella. La justicia, tanto civil como inquisitorial no era igual para todo el mundo.

En julio de 1792 llegaron a Vitoria una familia de artistas de Opera italianos en tránsito hacia la Corte. Al pasar sus pertenencias por la aduana resultó que llevaban una serie de libros deshonestos que, en principio, debían ser requisados por el Santo Oficio. Pero la familia italiana tenía aparentemente poderosos protectores y los comisarios de la Inquisición dudaban sobre la actitud a adoptar para con los libros obscenos. Veamos como lo explican al Tribunal de Logroño en busca de solución.

«Habiéndose presentado en esta aduana los baúles para el reconocimiento, entre otras cosas de contrabando hallaron 31 libros que dicen son de los operantes, todos los tratados los mas lascivos y obscenos que aunque el diablo los escribiera dicen no podría dictar mayores abominaciones, el primer tomo me han informado contiene 32 capítulos en que muestra las 32 maneras de fornicar con sus láminas respectivas a cada capítulo» (48). Pero los operantes van acompañados de una señora embajadora y un conde que son sus valedores, y el comisario de Vitoria no se atreve a actuar con más energía. El Tribunal de Logroño levanta un expediente: «Expediente formado en este Santo Oficio con motivo de haberse detenido en la Real Aduana de Vitoria treinta y un libros los mas lascivos y obscenos, con láminas, que parece son de un operante y una operanta que el 16 de julio llegaron a dicha ciudad en tránsito para esa Corte, en compañía de una señora embajadora y un conde al parecer pariente de ésta, que favorecen a dichos italianos»

Parece ser que, según dice el comisario de Vitoria «La dicha Señora embajadora, que está apasionada por los operantes hizo aier posta a Madrid para que absuelva a dichos operantes» (49). La Señora embajadora llega en su entusiasmo por los operantes, hasta el extremo de escribir a Madrid pidiendo se les deje pasar con sus libros. El Consejo de la Suprema, recibe el expediente de los inquisidores de Logroño y hace averiguaciones para ver si hay que mostrar mano dura o guante de terciopelo. Las pesquisas, rápidamente realizadas, permiten suponer que se puede actuar con contundencia y así se informa al comisario de Vitoria, que en carta del 21 de agosto de 1792, escribe al Tribunal de Logroño que «Por las informaciones resulta que el dicho conde no lo es, se llama Don Francisco Correa, de nación portugués, que venía acompañando a la Señora viuda de Sousa, embajadora que fue de Portugal. Los operantes, monsieur Todi y su familia, son italianos» (50).

Un falso conde, una embajadora (se entiende que consorte) viuda. Lo que parecía oro es únicamente oropel, los cómicos italianos tienen unos protectores de poco peso y la Inquisición puede actuar a su gusto, sin miedo a reconvencciones desde las altas esferas del poder. Los operantes se quedarán sin sus libros obscenos y el comisario de Vitoria, Rafael Díaz de Olarte podrá descansar con la tranquilidad del deber cumplido después de un largo mes de tiras y aflojas con el conde fingido y la embajadora tronada.

(48) AHN Inq. leg.º 2.243/2

(49) Ibidem.

(50) Ibidem.

Había ocasiones en que los libros prohibidos llegaban a manos del comisario por pura casualidad. Esto sucedió con un libro que el economista Valentín de Foronda había recibido de Bayona. Se trataba de la obra de J.P. Brissot de Warville «Theorie des lois criminelles» impreso en Berlín en 1781. Una vez leída la obra, Valentín de Foronda lo remitió al cura de Mendivil, localidad cercana a Vitoria, Don Francisco Ramírez de la Piscina, gran amigo suyo. Pero el encargado de entregarlo se equivocó, y lo dejó en casa de Don Tomás de Mendivil, canónigo penitenciado de la Santa Iglesia, que rápidamente lo delató al comisario del Santo Oficio Miguel Ramón de Zumalave (51). Esta desgraciada confusión tuvo lugar en agosto de 1787 y dio origen al primer incidente (después vendrían otros más) entre Valentín de Foronda y la Inquisición. El libro en cuestión examinado por dos calificadores de Vitoria, Fray Gregorio del Burgo y Fray Ambrosio de Azcárate, ambos del convento de San Francisco, fue considerado nocivo y prohibido «in totum». No tiene nada de extraño que una de las principales obras del juriconsulto Brissot, futuro líder de los girondinos y autor del diario «Le patriote français» que tanta importancia tendría para el triunfo de la Revolución, fuese censurada «in totum». Este suceso es significativo de un hecho incuestionable: la élite culta del País, a pesar de las trabas y los «cordones sanitarios» estaba al tanto de las corrientes ideológicas que se originaban más allá de las fronteras peninsulares.

DESPUES DE LA PAZ DE BASILEA

Los acuerdos suscritos entre España y la República francesa en Basilea, en abril de 1795, pusieron fin al enfrentamiento bélico que, durante año y medio opuso a los dos estados La Guerra de la Convención (1793-1795) pues con este nombre ha pasado a la historia, fue desencadenada por España con la pretensión de vengar la muerte de Luis XVI, primo del monarca español, en la guillotina, y de suministrar un escarmiento a los ensoberbecidos republicanos franceses que pretendía exportar la Revolución al resto de las naciones europeas. La monarquía española se alzó en defensa de los ideales del Antigua Régimen y provocó una guerra que, a muy corto plazo resultó desastrosa para las armas peninsulares y acabó vergonzosamente en Basilea. Pero este humillante tratado, que entre otras cosas cedía a los franceses la Isla de Santo Domingo, no significó un respiro para la censura. Los franceses habían pasado de ser enemigos a convertirse en aliados de conveniencia, pero las «ideas democráticas» procedentes del otro lado del Pirineo continuaban proscritas en todo el ámbito de la monarquía española. La Inquisición siguió colaborando con el poder político con el mismo ardor que en los momentos más agitados de la escalada revolucionaria. Los censores de la aduana de Vitoria continuaban trabajando como en los tiempos anteriores a la guerra o incluso de forma más acelerada porque el tratado de Basilea fue la causa de que muchos españoles que, por ser simpatizantes del sistema político francés, se habían visto obligados a refugiarse en el vecino país en los momentos más duros de la Guerra de la Convención, volvieron de nuevo a instalarse en España con sus pertenencias. Obviamente, en la mayoría de los casos, se trataba de gente ilustrada, propietaria de buenas bibliotecas que debían salvar la aduana para desesperación de los censores. En mayo de 1797, Rafael Díaz de Olarte escribía al inquisidor Ansoategui, del Tribunal de Logroño porque «Don Manuel de Llanos, teniente diputado de esta Provincia me dijo antes de aier, le avisaban de Burdeos que habían remitido para el marqués de la Colomilla, que reside en Burgos diez y ocho mil tomos, cuatro mil de ellos manuscritos y le disuadí admitiese semejante comisión. Si llegan me dará VS. orden de lo que he de hazer» (52). Es fácil suponer el espanto del comisario Díaz

(51) AHN Inq. leg.^o 4.500/1, exp. 16.

(52) AHN Inq. leg.^o 4.429/1, exp. 23.

de Olarte ante la avalancha de la biblioteca del marqués de la Colomilla (53), la aduana de Vitoria era insuficiente para atender una cantidad semejante de libros recibidos de golpe. Y el tribunal de Logroño tampoco quería hacerse cargo de la calificación de dieciocho mil volúmenes, así se lo hacía saber el inquisidor Ansotegui a Díaz de Olarte «Pues en este Santo Oficio, como tenemos representado a V.A., carecemos de sujetos que puedan censurar tanto número de volúmenes». En el expediente no consta el final de este episodio, suponemos que, tarde o temprano los libros llegarían a su destino a pesar de las protestas del comisario de Vitoria. El Marqués de la Colomilla en ese momento tenía resortes capaces de aglizar el propio aparato inquisitorial. No cabe duda de que en esta época los calificadores trabajaron sin descanso. En la documentación aparecen numerosas quejas y peticiones de alguna compensación (el trabajo de estos colaboradores no estaba remunerado) para poder sobrellevar semejante carga, así «Gregorio Antonio Malo, calificador del Santo Tribunal de la Inquisición de Navarra» ha enfermado por el exceso de trabajo y padece «rigurosas molestias de vehementes reumáticos dolores y rotura intestinal, por cuiu causa, a consulta de físicos, me miro privado del ejercicio de la Santa predicación y por consiguiente del alivio para el socorro de los surtidos precisos necesarios en una persona en continuo estudio como lo son el chocolate, tabaco, etc.» (54). Por lo visto, los calificadores tenían que echar mano de estimulantes para poder hacer frente al superávit de actividad a que les obligaban las especiales circunstancias del momento. La carta de Gregorio Antonio Malo está fechada en diciembre de 1798. En ese tiempo, en la Aduana de Vitoria se trabajaba sin descanso. El Revisor Real Juan Prudencio de Verástegui era tan puntilloso como los comisarios inquisitoriales. En enero de 1800 retuvo un envío de libros a pesar de que iban dirigidos al Consejo, a nombre del Inquisidor General, Don Ramón José de Arce, y de que llevaban «el Santo sello de la Inquisición por precinto». Juan Prudencio de Verástegui, más estricto que los propios funcionarios del Santo Oficio desconfiaba del paquete que procedía de la firma Francisco Javier de Larreandi e hijos de San Sebastián. Para justificar su proceder, escribió una carta al propio Inquisidor general, destinatario de los libros «Espero se servirá V.E. participarme si es cierto va dicho caxon con destino a V.E. para en hefecto revisarlo en cumplimiento de mi comisión, pues ahunque me han asegurado no comprende mas que tres ejemplares de la Historia Natural de Bufon, suelen los corresponsales o comerciantes de libros en francia incluir muchas obras que no vienen comprehendidas en listas, de que tengo larga experiencia» (55).

Como ya hemos apuntado antes, al hablar del caso del Marqués de la Colomilla, la normalización de las relaciones con Francia sobrecargaba de trabajo a los censores de Vitoria. Amadeo Dujardin, ciudadano francés residente en Madrid enviaba una carta indignada al Consejo el 20 de Enero de 1800 protestando porque en la aduana de Vitoria le habían retenido dieciseis cajones de libros y estampas que le enviaban de París a pesar de no figurar en el índice expurgatorio (56). El reproche del ciudadano Dujardin es uno más de los innumerables que aparecen en la documentación del Santo Oficio, procedentes de españoles y extranjeros. El clamor general acusa a los censores de Vitoria de obstaculizar el paso de publicaciones hacia el interior de la Península. Pero la responsabilidad de esta obstrucción no atañe únicamente a los censores del Santo Oficio. Ya hemos visto que el Revisor Real Juan Prudencio de Verástegui era extremadamente diligente en el desempeño de su actividad, tanto

(53) Hay algunos trabajos sobre este interesante personaje que, a lo largo de su vida, tuvo varios choques con el Santo Oficio. El más conocido es la biografía escrita por el Marqués del Saltillo: LASSO DE LA VEGA, M. *Un comerciante bilbaíno del Siglo XVIII. El Marqués de la Colomilla (1742-1816)*. Madrid, 1932.

(54) AHN Inq., leg.^o 2.244/1.

(55) *Ibidem*.

(56) AHN Inq., leg.^o 2.244/2.

que, a los cinco años de haber sido nombrado para su cargo se encuentra agotado y pide algún beneficio a cambio del deber rectamente cumplido. El 30 de junio de 1801 escribió una carta a Don Pedro de Cevallos, Secretario de Estado en la que se quejaba de su incomprendida situación «Al mismo tiempo me atrevo a presentar a V.E. que desde el año 1796 en que se creó esta comisión Real de mi cargo, la estoy sirviendo a costa de un incesante trabajo, porque apenas hai en el Reino una Aduana en donde se registre mayor número de libros. Sin embargo de mis representaciones hechas al Exmo. Señor Don Mariano Luis de Urquijo en tiempo en que estuvo interinamente a su cargo la secretaría que oy está en propiedad al de V.E. no conseguí ni una corta dotación que me compensase del coste del escribiente que mantengo estos cinco años, a pesar de la cortedad de mi prebenda que no pasa de 44 reales y de lo que tengo que gratificar a las personas a quienes cometo la revisión de algunos libros por no poder hacerlo todo por mí y desear el acierto, la prontitud del despacho y llenar el objeto de mi comisión.» (...)

«El revisor de Agreda y algún otro han sido atendido por solo el mérito que han contraído en la revisión de libros. Yo me valgo de las que constan en la adjunta relación». Acompaña a la carta un cuadernillo con la «Relación de Méritos, Grados y Ejercicios Literarios del Dr. Don Juan Prudencio María de Verástegui» y la copia de tres cartas del príncipe de la Paz agradeciendo los servicios del hermano de Juan Prudencio que en un alarde de originalidad se llama Prudencio María. La carta a Cevallos continúa «Mi hermano Don Prudencio María de Verástegui ha sido nueve años diputado general de esta Provincia y le cogió en este destino la última Guerra con Francia, con cuyo motivo sacrificó en obsequio de sus soberanos su reposo y sus bienes y empleó todo su celo y amor en acreditar una lealtad sin límites como es notorio, y que ni los respetos de diez hijos le separaron del cumplimiento de sus supremas obligaciones» (57). Juan Prudencio de Verástegui pasa finalmente a realizar sus peticiones «En esta consideración suplico a VE. incline el ánimo del soberano a que me confiera un beneficio o simple pensión que sufrague los dispendios que sufro en esta comisión y sirva de alivio a unos sobrinos que han quedado casi indotados por la generosa lealtad de sus padres».

En el mismo expediente hay una carta del hermano diputado, Prudencio María, escrita tres años antes, en junio de 1798 al exmo. Señor Don Francisco Saavedra pidiendo desesperadamente ayuda «La numerosa familia de diez hijos (ocho impúberes) que tengo» le obliga, a pesar del «rubor que cubre mi semblante a solicitar por todos los medios justos mi subsistencia». Prudencio María también hace valer sus méritos «En los nueve años que serví a su Majestad sin sueldo ni emolumento alguno en clase de Diputado General y único jefe político militar de esta Provincia de Alava, no perdone fatiga ni diligencia alguna para realizar mis deberes, maiormente durante la última guerra con los franceses) (58). La familia Verástegui pertenecía a la oligarquía alavesa donde hacía muchas generaciones, pero por varios motivos, entre los que se contaba también el ser extraordinariamente prolíficos, habían venido a menos en lo económico, pero continuaban teniendo un gran poder político en la Provincia. En aquellos años turbulentos, marcados por la guerra y la depresión económica, fueron muchas las familias notables del País Vasco que se vieron al borde de la ruina, contribuyendo a fomentar le descontento general. El apellido de Verástegui, que aparece durante el siglo XVIII ligado tanto al poder gubernativo como inquisitorial (hay numerosos familiares de la Inquisición entre sus miembros), es un ejemplo paradigmático de familia ideológicamente vinculada al Antiguo Régimen que, en el siglo XIX, al producirse el conflicto Carlista, se inclinará en bloque por la causa del Pretendiente.

(57) AHN Estado, leg.º 3.006.

(58) *Ibidem*.

EL CONTRATO SOCIAL Y EL CAMINO REAL

Al comenzar el siglo XIX la situación en Francia había ido evolucionando sensiblemente desde los tiempos del rabioso proselitismo revolucionario de la Convención. Después de cuatro años de Directorio, el 19 del brumario (10 de noviembre de 1799) Napoleón se hizo con el poder. Los pactos suscritos entre España y Francia en Basilea seguían vigentes y concedían (entre otros derechos) la libertad de paso por el territorio español a los ejércitos franceses. En opinión del Santo Oficio esta concesión servía para introducir libros prohibidos con la mayor impunidad.

En mayo de 1801, el tribunal de Logroño, fue alertado de que las tropas francesas que se dirigían a Portugal, atravesando el distrito, iban dejando a su paso un pernicioso reguero de obras prohibidas entre las que destacaban varios ejemplares de «El Contrato Social» de Rousseau. El ejército francés cruzaba la Península para obligar a Portugal a renunciar a su tradicional política de alianza con Inglaterra, en la llamada «Guerra de las naranjas» y los inquisidores de Logroño tenían elocuentes indicios de que aprovechaban esta oportunidad para introducir libros de autores censurados.

En carta del 22 de julio de 1801, enviada a todos los comisarios de las villas situadas a lo largo del camino real, los inquisidores de Logroño piden informes detallados de todo lo concerniente a libros prohibidos «por haber llegado noticias de que un francés había llegado a Miranda de Ebro con varios libros a mas dañosos entre ellos el contrato social de Juan Santiago Rousseau» (59). Se pide a los comisarios que hagan «pesquisas para averiguar la identidad de la persona de dicho librero, venta y despacho que aia hecho de los mencionados libros, y recoger los que puedan ser habidos».

Contesta Rafael Ruiz de Olarte, el comisario de Vitoria, lugar en donde, por existir una aduana, debían haberse detenido los contingentes de tropas que pasaban camino de Portugal, para permitir el registro de sus bagajes, pero por lo que notifica Ruiz de Olarte, se han comportado con insoportable arrogancia, negándose a dejar actuar a los funcionarios tanto civiles como inquisitoriales. «...no dudan y aseguran que las tropas francesas han pasado muchísimo contrabando y a pretexto de ello, con vestido de oficiales, han pasado librerías de oficio con lo que se les ha antojado» (60). Después de mucho forcejeo y a duras penas «el vista de la aduana abrió un cajón que contenía doscientos rollos de ojas para hacer rapé y le amenazaron pues estaban ocho con las espadas desenvainadas». El vista no pudo continuar con su trabajo pues se jugaba la vida, y los funcionarios de la aduana vitoriana fueron insultados y amenazados por la soldadesca francesa.

José Antonio de Errazu, comisario de Irún dice «Es cierto que en medio de ser un concepto común y general que las tropas francesas que transitan para el interior han hecho en sus furgones quanto contravando han querido, no se me ha ofrecido que podía ser de libros, por lo que tampoco he practicado diligencias; pero ahora, con la prevención que me hace V.S. las llevaré a cabo» (61). No se distinguían, ni mucho menos, por su celo los comisarios de Irún, José Antonio Errazu no era una excepción. A lo largo del siglo XVIII la Inquisición de Logroño tendrá que amonestar e incluso sancionar a algunos comisarios. Como ya hemos visto, en Irún no existía aduana y los funcionarios del Santo Oficio se desentendían de registrar las mercancías. Según un informe de la Inquisición de Logroño, de 1798, el comisario Olazabal se limitaba a «enviar a la criada, saliendo a pedirles al camino (a los conductores de mer-

(59) AHN Inq., leg.º 2.245/1

(60) Ibidem.

(61) Ibidem.

caderías) los derechos de registro de la Santa Inquisición a razón de tres reales por carga» (62). Tres reales que se cobraban por el trabajo que se tomaba (al menos teóricamente) el comisario al reconocer los fardos. En Irún esta tarea casi nunca se realizaba y esta desidia facilitaba la introducción de obras y publicaciones perniciosas para el mantenimiento de la sana moral y las buenas costumbres de los habitantes de la monarquía española.

Tomás de Sorraquieta, comisario de Tolosa, responde lacónicamente con una corta misiva en la que indica que «queda enterado» (63). Entre los comisarios de Irún y de Tolosa surgían frecuentemente rencillas. El laxismo de los irundarras obligaba a los de Tolosa a hacer un trabajo suplementario. Los comisarios de la ciudad fronteriza no se molestaban en reconocer las cargas, pero cobraban por los derechos de registro.

Cuando los conductores con sus acémilas llegaban a la adunilla de Tolosa, que era la encargada de cobrar los arbitrios entre Guipuzcoa y el reino de Navarra, los comisarios del Santo Oficio acostumbraban a reconocer los farsos en busca de libros prohibidos. Como los derechos de registro ya los había tenido que abonar en Irún —sin ser registrados— frecuentemente los transportistas se negaban a pagar por segunda vez al Santo Oficio, dando motivo a innumerables incidentes que finalmente debían ser solventados por las autoridades civiles.

Mateo Larracochea de Villafranca (Ordizia) dice que «No extrañaría si me dicesen que han pasado diez o doce mil ejemplares de todas obras, las puertas han tenido abiertas y nadie, creo, les abrá dicho que lleva V.M. ay?» (64).

Juan Francisco Torrano, comisario de Bergara informa de que «Las tropas francesas no han entrado en la población de esta Villa, pues pasan sin detención alguna a distancia de ella, por una ermita de la invocación de San Antonio, que está en el camino a la Villa de Mondragon; pero no se duda i se asegura publicamente, llevan mucho contrabando i el que mucho aprecian ellos es el de los malditos libros» (65).

Joseph Aristi, comisario de Escoriaza advierte que localizar las obras prohibidas «será bastante dificultoso porque a cada punto pasan tropas y artillería con mucho carruaje y a estos, tengo entendido, no los registran y, por lo mismo no solo pasan libros sino también mucho contrabando» (66).

El último informe de este expediente procede de Francisco de Soto, comisario de Miranda de Ebro. «No he podido averiguar el nombre, apellido, patria o alguna otra señal que distinga al citado francés (...) Parece que no se realizó en este pueblo compra alguna de libro o libros que llevaba (...) Creo que no ha vuelto a pasar a Francia, a lo menos por este camino porque el comandante del resguardo del Cordón del Ebro, que vive aquí, me ha dicho tener mandado a los ministros que guardan el puente esperen su pasada y le den parte, sin que haia habido novedad» (67).

Como puede deducirse a través de este documento, el paso del ejército francés camino de Portugal sirvió muy probablemente para introducir libros prohibidos, entre otros muchos artículos de contrabando. La situación no varió sustancialmente en los años siguientes, en los que con uno u otro motivo las tropas francesas pasaron el Bidasoa. La censura de la aduana de Vitoria siguió trabajando, contra viento y marea hasta 1808.

(62) AHN Inq., leg.^o 3.729/1, exp. 108.

(63) AHN Inq., leg.^o 2.245/1.

(64) *Ibidem*.

(65) *Ibidem*.

(66) *Ibidem*.

(67) *Ibidem*.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA CENSURA INQUISITORIAL

La invasión napoleónica provocó la eliminación de las aduanas tradicionales. La administración josefina creó un nuevo sistema de barreras que no coincidía con el de la monarquía borbónica. Por otra parte, el Santo Oficio mediante un decreto napoleónico, en cuya elaboración había participado el antiguo secretario de la Inquisición de Corte, Juan Antonio Llorente, convertido en ferviente partidario del rey José I, abolió al temido Tribunal en diciembre de 1808. Lógicamente este decreto solo entró en vigor en los territorios sometidos al dominio francés, pero el distrito en el que se asentaba el Tribunal de Logroño quedaba dentro de la demarcación, cada vez más extensa, controlada por los franceses. La aduana de Vitoria había dejado de existir desde mediados de 1808 y los funcionarios del Santo Oficio en la ciudad del Zadorra se refugiaron en la oscuridad de sus conventos o se vieron obligados a exiliarse. A partir de esta fecha, a pesar de la restauración fernandina y del edicto del 21 de julio de 1814, restableciendo el Santo Tribunal, los censores de la aduana de Vitoria no volvieron a trabajar como en los tiempos anteriores a la invasión napoleónica. Las circunstancias del París y la situación de la Europa surgida del Congreso de Viena, habían cambiado radicalmente. Nuevas ideologías aparecían en el horizonte postnapoleónico que muy poco tenían que ver con el «espíritu de las luces» que con tanto ardor había combatido la temible inquisición. La documentación nos muestra que el equipo censor de Vitoria trabajó lánguidamente hasta 1820, fecha en que, de nuevo, el 7 de marzo, fue abolido el Santo Oficio. A pesar de que en 1823, con el nombre de Tribunal de la Fe, la Inquisición entró de nuevo en vigor (69), apenas ha quedado rastro documental de su actividad. Concretamente, la labor de los censores de Vitoria, según todos los indicios, no se prolongó hasta 1834, fecha de la extinción definitiva del Tribunal sino que, posiblemente, a partir de 1820 ya no hubo funcionarios inquisitoriales en la aduana. Sin embargo, durante muchos años los nostálgicos del Tribunal defendieron su efectividad para librar a la nación de los peligros de la irreligiosidad, la depravación moral y la herejía. En una fecha tan tardía como 1870, una junta carlista propugnaba restablecer la Inquisición cuando llegaran al gobierno (70); los partidarios del Santo Oficio eran numerosos entre las filas de Don Carlos pero ya no se podía dar marcha atrás a la máquina de la Historia y aunque otras inquisiciones y otras censuras seguirían imponiéndose a la libertad de pensar de los ciudadanos, la Inquisición por autonomasia dejó de existir, el 15 de julio de 1834.

(68) MERCADER RIBA, J. *José Bonaparte, Rey de España, 1808-1813*. Madrid 1971, p. 83.

(69) ALONSO TEJADA, L. *Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII*. Ediciones Zero. Madrid, 1969, p. 69. Este libro, hasta ahora, es el mejor documentado sobre los últimos años del Santo Oficio. Su autor ha manejado fuentes inéditas de sumo interés para conocer los avatares finales del temido tribunal.

(70) LEON, H. *Histoire des juifs de Bayonne*, Armand Ducharloi, París 1893, p. 201.